

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL



JUZGADO 9º ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA

Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil diecinueve (2019).

Referencia: 110013335 009 **2018 00515 00**
Demandantes: Ana Judith Sánchez Díaz y otros
Demandados: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y
otro

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

(Admite demanda)

1. La señora **Ana Judith Sánchez Díaz, María Cristina Acosta Díaz, Raquel Beatriz Navarro Mojica, Margarita Rosa Coca de Arango, Luis Gerardo Mora Parra, María Teresa Bermúdez Huertas y Judith González de Ontibon** formularon demanda de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG y la Secretaría de Educación Bogotá D.C., para que se declare la nulidad de acto ficto o presunto negativo, por cuanto no se pronunció sobre la solicitud del 26 de diciembre de 2017, en la que petitionó el reintegro y suspensión de los descuentos en salud de las mesadas adicionales (fls.53 a 58).
2. Este Despacho judicial decidió inadmitir la demanda mediante providencia del 28 de enero de 2019 (fl.61), porque advirtió que con la demanda (i) no se aportó la conciliación prejudicial; (ii) y se integró indebidamente el contradictorio.
3. En escrito del 11 de febrero de 2019, la parte actora presentó escrito de subsanación de la demanda (fls.64 a 67), en el que señaló que no es procedente el requisito de procedibilidad por tratarse de derechos ciertos, irrenunciables e imprescriptibles la devolución y suspensión de los descuentos de salud del 12% de la mesada adicional de junio y diciembre. También indicó que el ente encargado y del cual recae la responsabilidad de realizar y ordenar los descuentos de salud es el FOMAG y no la EPS.

4. La Secretaría ingresó el expediente el 27 de febrero de 2019 (fl.68).

5. Ahora bien, en vista de que en reiteradas providencias la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,¹ ha revocado las decisiones donde se ha exigido los requisitos señalados en la inadmisión, procederá el Despacho a admitir la demanda.

6. Por otra parte, el Despacho advierte que la demanda se dirigió también contra la Secretaría de Educación de Bogotá D.C., (fl.153). Sin embargo, tanto en los hechos como en las pretensiones, no se encuentra ninguna imputación fáctica y jurídica como para vincular a la entidad territorial, además de que el Consejo de Estado² ha señalado que la entidad encargada del reconocimiento y pago de las prestaciones de los docentes es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En efecto, el artículo 5º de la Ley 91 de 29 de diciembre de 1989 manda:

« [...] El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, tendrá los siguientes objetivos:

1. Efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado [...]»

En relación con los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, debido al proceso de nacionalización de la educación oficial llevado a cabo mediante la Ley 43 de 1975, la citada norma señaló que quedarían automáticamente afiliados al Fondo los docentes nacionales o nacionalizados vinculados a la fecha de promulgación de la citada ley, esto es, el 29 de diciembre de 1989 y, así mismo, el personal vinculado con posterioridad, siempre que cumplieran los requisitos de afiliación de naturaleza formal o normativa y económica.

Por su parte, respecto al manejo de los recursos que integran el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el artículo 3º de la Ley 91 de 1989, indicó que para tal efecto el Gobierno Nacional suscribiría un contrato de fiducia mercantil con una entidad fiduciaria de naturaleza estatal o de economía mixta la cual se encargaría de su administración. Textualmente, señaló:

¹ Subsección F, auto del 08 de junio de 2018, Rad. 110013335009201600353-01, MP. Patricia Salamanca Gallo; Subsección A, auto del 20 de septiembre de 2018, Rad. 110013335009201600493-01, MP. Néstor Javier Calvo Chaves; Subsección C, auto del 31 de octubre de 2018, Rad. 110013335009201500803-01, MP. Amparo Oviedo Pinto.

² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de febrero de 2013, Consejero Ponente Gerardo Arenas Monsalve, número interno 1048 de 2012.

«[...] El Gobierno Nacional suscribirá el correspondiente contrato de fiducia mercantil, que contendrá las estipulaciones necesarias para el debido cumplimiento de la presente Ley y fijará la Comisión que, en desarrollo del mismo, deberá cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija, o variable determinada con en los costos administrativos que se generen. La celebración del contrato podrá ser delegada en el Ministro de Educación Nacional [...]»

Con posterioridad, el Presidente de la República mediante Decreto 1775 de 3 de agosto de 1990, artículos 5° a 8°, reglamentó el funcionamiento del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de la siguiente manera:

« [...] Artículo 5° Recepción de solicitudes. Las solicitudes relacionadas con el reconocimiento y pago de prestaciones económicas del Magisterio, serán radicadas en la oficina de prestaciones sociales de cada Fondo Educativo Regional.

La documentación sólo será radicada si llena los requisitos establecidos en las normas reglamentarias.

Artículo 6° Estudio de solicitudes. Una vez radicada la solicitud, la oficina de prestaciones sociales de cada Fondo Educativo Regional, procederá a realizar el estudio de la documentación.

Artículo 7° Liquidación. Realizado el estudio de la documentación, se procederá a efectuar la liquidación respectiva con el visto bueno de la entidad fiduciaria.

Artículo 8° Reconocimiento. Efectuada la liquidación, el delegado permanente del Ministerio ante el Fondo Educativo Regional, expedirá la resolución de reconocimiento [...]»

No obstante lo anterior, en relación con este mismo punto, el Congreso de la República mediante el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, señaló que las prestaciones sociales pagaderas a los docentes oficiales serían reconocidas y pagadas por el Fondo del Magisterio, mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre dicho fondo, el cual en todo caso debía ser elaborado por el Secretario de Educación de la entidad territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. Textualmente, señaló:

« [...] Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial. [...]»

Por lo tanto, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a través de la Secretaría de Educación del ente territorial respectivo, le está dada la función de expedir el acto administrativo por el cual se reconoce y ordena el pago de la prestación solicitada por el docente peticionario, en virtud de los artículos 5º a 8º del Decreto 1775 de 1990 y 5 del Decreto 2831 de 2005.

Con base en lo precedente, en el presente caso se observa que la Secretaría de Educación de Bogotá expidió las resoluciones 4209 del 19 de junio de 2014 (fls.14 a 16), 3656 del 24 de julio de 2013 (fls.19 a 20), 025 del 13 de enero de 2006 (fls.23 a 24), 845 del 20 de febrero de 2007 (fls.29 a 31), 6072 del 07 de noviembre de 2007 (fls.32 a 34), 2415 del 22 de abril de 2013 (fls.38 a 39) y 558 del 27 de marzo de 1996 (fls.44 a 46), en la que reconoció y ordenó el pago de la pensión de vitalicia de jubilación de los demandantes respectivamente.

No obstante, conforme lo señalado en precedencia, las prestaciones sociales pagaderas a los docentes oficiales serían reconocidas y pagadas por el Fondo del Magisterio, mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre dicho fondo, el cual en todo caso debía ser elaborado por el Secretario de Educación de la entidad territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente.

Esta obligación le corresponde exclusivamente al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y no a la entidad territorial, toda vez que esta únicamente tiene a su cargo elaborar el proyecto de resolución de reconocimiento para que sea aprobada o improbada por la entidad fiduciaria.

Por lo que el Despacho no encuentra ninguna imputación fáctica o jurídica para vincular como demandada a la entidad territorial Bogotá D.C. – Secretaría de Educación de Bogotá D.C., motivo por el cual rechazará el libelo respecto de ella.

3. Una vez verificado que la demanda reúne los requisitos legales (artículo 161 y s.s. del CPACA), el Despacho procederá a su admisión.

En mérito de lo expuesto, el **Juzgado Noveno Administrativo –Sección Segunda- del Circuito Judicial de Bogotá,**

RESUELVE

PRIMERO: ADMITIR la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, instaurada por los señores **Ana Judith Sánchez Díaz, María Cristina Acosta Díaz, Raquel Beatriz Navarro Mojica, Margarita Rosa Coca de Arango, Luis Gerardo Mora Parra, María Teresa Bermúdez Huertas y Judith González de Ontibon** quienes actúan a través de apoderado judicial en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (**FOMAG**).

SEGUNDO: RECHAZAR la demanda respecto de la entidad territorial **Bogotá D.C. – Secretaría de Educación.**

TERCERO: NOTIFICAR personalmente a:

- (I) a la demandada FOMAG;
- (II) al Agente del Ministerio Público;
- (III) y a la Agencia Nacional de Defensa Judicial del Estado.

De conformidad con el artículo 199 del C.P.A.C.A (modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso).

CUARTO: FIJAR como gastos del proceso la suma de cincuenta mil pesos (**\$50.000**) m/cte., valor que deberá ser consignado por la parte demandante, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta providencia, en la cuenta del **Banco Agrario – cuenta de ahorros N° 4-3192-0-00577-3 Convenio N° 11543**. Si hubiere otros gastos posteriores, oportunamente se ordenará su consignación (numeral 4° del artículo 171 del CPACA y Acuerdo N°. 2552 de 2004).


QUINTO: Cumplido lo anterior, por Secretaría, **CÓRRASE TRASLADO** a la entidad demandada y al Ministerio Público, por el término de treinta (30) días, atendiendo lo ordenado en el artículo 172 del CPACA y Decreto 1365 de 2013.

SEXTO: SOLICITAR a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL para que en el término de traslado de la demanda aporte copia del expediente administrativo que contenga en su integridad los antecedentes de la actuación objeto del proceso.

Se **exhorta** a la parte demandada a realizar la gestión indicada anteriormente.

SÉPTIMO: De las excepciones que proponga la parte demandada, sin necesidad de auto que lo ordene, por Secretaría **CÓRRASE TRASLADO** a la parte contraria por el término de tres (3) días de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 175 del CPACA.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.


GUILLERMO POVEDA PERDOMO
Juez

Nulidad y Restablecimiento del Derecho (Admite demanda)

Referencia: 110013335 009 **2018 00515 00**

Demandantes: Ana Judith Sánchez Díaz y otros

Demandados: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG y otro

Y A H L

**JUZGADO 9º ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.,
SECCIÓN SEGUNDA**

NOTIFICACION POR ESTADO

El presente auto, se notifica a las partes por anotación en estado de fecha **diecinueve (19) de marzo de dos mil diecinueve (2019)** a las 8:00 a.m. de conformidad con lo establecido en el artículo 201 del CPACA.

Miryam Yanneth Martínez Cortes
Secretaria